



Columna



Cristian Rodríguez
Director IPP UCN

Calama: cuando la violencia entra a la escuela

Lo ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama debe ser tratado, antes que todo, con respeto. El Ministerio de Educación confirmó el fallecimiento de una funcionaria y anunció apoyo para la comunidad educativa, mientras la prensa informó además personas lesionadas, evacuación del establecimiento y suspensión de actividades. Pero el problema público no termina en la conmoción. También exige una lectura más incómoda: entender qué está diciendo este hecho sobre la escuela y sobre la sociedad que la rodea.

Mi impresión es que el problema de fondo no es sólo la violencia escolar. Es algo más profundo: la fractura de la autoridad en espacios que antes actuaban como contención. Cuando una violencia extrema irrumpe en la escuela, no estamos únicamente ante un quiebre de convivencia interna. Estamos viendo el colapso simultáneo de varias mediaciones: la capacidad de detectar a tiempo, de contener conflictos, de poner límites y de intervenir antes de que el daño se vuelva irreversible. La escuela no inventa la violencia que la atraviesa; muchas veces la recibe desde un entorno social más crispado y luego la expone del modo más cruel.

Por eso conviene distinguir. Violencia escolar y violencia social no son idénticas, aunque hoy se tocan cada vez más. La primera remite a los conflictos que emergen dentro del espacio educativo. La segunda describe un clima más amplio de inseguridad

y deterioro de las normas de convivencia. El problema aparece cuando ambas capas se superponen y la escuela deja de ser un espacio protegido para convertirse en un lugar que también absorbe el desorden del entorno.

Los datos sugieren que no se trata de una preocupación marginal. La Superintendencia de Educación informó que en 2025 recibió 22.680 denuncias, 18,7% más que en 2024, y que más del 75% correspondió al ámbito de convivencia educativa. Ese dato no prueba por sí solo una relación causal con hechos extremos como el de Calama, pero sí muestra que el sistema escolar viene operando bajo una presión creciente. Cuando las alertas aumentan de forma sostenida, lo responsable no es seguir tratando cada episodio grave como si fuera una excepción sin contexto.

La discusión, entonces, no puede reducirse a más vigilancia ni agotarse en la contención emocional. Una escuela segura necesita ambas cosas que hoy suelen presentarse como opuestas: cuidado y autoridad. Necesita equipos de convivencia más robustos, apoyo psicosocial oportuno, mejor coordinación con las familias y una autoridad adulta, capaz de intervenir antes de que el conflicto escale. Después de Calama, el país debería asumir algo más exigente: que la protección escolar se reconstruye fortaleciendo las mediaciones que hoy aparecen demasiado debilitadas. Ésa, quizá, es la advertencia más dura que deja esta tragedia.